

ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:	CHILE/CSC - Cono Sur
▪ Nombre de la CT:	Mejora Regulatoria para un Entorno de Negocios Inclusivo
▪ Número de CT:	CH-T1257
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Farias, Pedro Cesar L. (IFD/ICS) Líder del Equipo; Jarquin Ramos, Maria Jose (IFD/ICS) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Reyes, Javier Ramiro (IFD/ICS); Paz Gonzalez, Santiago (IFD/ICS); Chaverri-Suarez, Alonso J. (LEG/SGO); Manzur Madariaga, Michelle (IFD/ICS)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Número y nombre de la operación que apoyará la CT:	N/A
▪ Fecha del Abstracto de CT:	19 Mar 2021
▪ Beneficiario:	Chile
▪ Agencia Ejecutora:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$150,000.00
▪ Contrapartida Local:	US\$0.00
▪ Periodo de Desembolso:	30 meses
▪ Tipos de consultores:	Individuos; Empresas
▪ Unidad Responsable de Preparación:	IFD/ICS - División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSC/CCH - Representación Chile
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Sí
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Productividad e innovación; Integración económica; Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Apoyar la construcción de capacidad institucional para la política regulatoria, con énfasis en la protección de los consumidores, la economía digital y la cooperación regulatoria internacional, de modo a contribuir a un ambiente de negocios más inclusivo y a una mayor competitividad. Los objetivos específicos son: (i) la consolidación de la adopción de buenas prácticas regulatorias; (ii) contribuir a una mejor evaluación de los efectos sociales de las regulaciones y, (iii) promover mejores regulaciones para el comercio internacional y la economía digital. La CT contribuirá a los objetivos de Préstamo Basado en Políticas (PBL) CHL1162 “Reformas Regulatorias para un Ambiente de Negocios Inclusivo y la Competitividad Digital”, a través de la generación de insumos y del apoyo a la implementación de sus medidas de política
- 2.2 De acuerdo con estimaciones iniciales del Gobierno de Chile, en el stock regulatorio del país existen más de 300.000 normas, entre las cuales se encuentran leyes, decretos, decretos con fuerza de ley, reglamentos y otras regulaciones administrativas de rango inferior. Asimismo, Chile ocupa el lugar 77 de 141 países en el Subindicador de Carga de la Regulación Gubernamental del Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial. En el contexto de la OCDE, el país se posiciona por debajo del promedio de los demás miembros en indicadores de “Simplificación y Evaluación de Regulaciones” y “Barreras al comercio y la inversión”, además de aspectos de independencia y rendición de cuentas de los reguladores sectoriales.

El país aún tiene grandes áreas de oportunidad en cuanto a la consolidación institucional de una política regulatoria y el uso de herramientas regulatorias de apoyo

a sus procesos decisorios. La inquietud social que ha marcado el país desde el 2019 refleja también la dificultad de los órganos gubernamentales de evaluar adecuadamente los efectos de sus decisiones sobre segmentos sociales afectados, como son los consumidores, PYMES y grupos vulnerables, reforzando la percepción de exclusión social por parte de ellos.

En los últimos años, Chile ha logrado avances importantes en la apertura de oportunidades comerciales, a través de acuerdos como el “*Digital Economy Partnership Agreement*” y el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Esos acuerdos incluyen relevantes e innovadores compromisos de modernización de políticas y marcos regulatorios, los cuales van a condicionar tanto el aprovechamiento de las nuevas oportunidades comerciales como la forma como se distribuirán sus efectos en la sociedad chilena.

El carácter novedoso de muchos de esos temas y la presión por respuestas oportunas de los reguladores y órganos de coordinación gubernamental plantean la necesidad de desarrollar nuevas capacidades institucionales en el sector público chileno para la gestión regulatoria, incluyendo capital humano y herramientas institucionales, una recomendación que ya aparecía en el informe elaborado en 2016 por la OCDE” de la OCDE sobre la política regulatoria en Chile”.

En tal sentido, el problema general que este proyecto busca afrontar es la limitada capacidad institucional para el manejo tanto del stock regulatorio como del flujo de nuevas regulaciones, lo cual afecta el ambiente de negocios y la productividad nacional. Las principales causas de ese problema están relacionadas a la escasa adopción de buenas prácticas regulatorias y a la necesidad de actualización del conocimiento en áreas muy afectadas por los cambios económicos, tecnológicos y sociales.

III. Descripción de las Actividades y Resultados

- 3.1 **Componente I: Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) e institucionalidad de la Política Regulatoria.** Fortalecer las capacidades para la gestión del flujo y del acervo regulatorio, a través de asistencia técnica que apoye la adopción de buenas prácticas regulatorias (evaluaciones ex-ante y ex-post, gobernanza, consultas públicas, coordinación y supervisión, revisión del stock regulatorio, etc.)
- 3.2 **Componente II: Regulación para la Inclusión Social.** Promover decisiones regulatorias que tomen en cuenta los efectos de la regulación sobre grupos sociales vulnerables, con énfasis en consumidores y PYMES. Será brindada asistencia y capacitación a servidores sobre efectos distributivos de las regulaciones y a consumidores y usuarios de servicios públicos sobre sus derechos.
- 3.3 **Componente III: Mejores Regulaciones para el Comercio Internacional y la Economía Digital.** Apoyo al fortalecimiento de capacidades regulatorias para: (i) cooperación regulatoria internacional para el cumplimiento de compromisos en acuerdos comerciales (TPP-11, DEPA, etc.) y (ii) regulación de nuevos modelos de negocios y uso de tecnologías emergentes en la economía digital (experimentación, manejo de datos, algoritmos, ciberseguridad, etc.).

IV. Presupuesto

Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) e institucionalidad de la Política Regulatoria	US\$40,000.00	US\$40,000.00
Regulación para la Inclusión Social	US\$45,000.00	US\$45,000.00
Mejores Regulaciones para el Comercio Internacional y la Economía Digital.	US\$65,000.00	US\$65,000.00
Total	US\$150,000.00	US\$150,000.00

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 5.1 A solicitud del beneficiario, el proyecto será ejecutado por el Banco, a través de IFD/ICS con apoyo de la Representación del Banco en Chile.
- 5.2 La justificación se enmarca en los criterios para ejecución por el Banco descritos en el Anexo 10 de las Guías Operativas para la Selección y Contratación de Firms Consultoras en Operaciones Ejecutadas por el Banco (OP- 1155-2), en particular las restricciones legislativas o procedimentales que dificultan la ejecución por parte del beneficiario.
- 5.3 Adicionalmente, la ejecución demandará la coordinación con distintas entidades que manejan temas vinculados a los objetivos de proyectos, en particular el Ministerio de Economía, SUBREI, SENARC, CNC y ChileAtiende, lo cual dificultaría la asunción de la responsabilidad por parte de una única entidad gubernamental.
- 5.4 ICS tiene amplia experiencia en la ejecución de CTs y en la capacitación de países de la región en temas como la medición de costos regulatorios, regulación de la economía digital, análisis de impacto regulatorio y consultas públicas, específicamente a través de las CTR RG-T2300, RG-T3169 y ME-T1430, además de los préstamos BR-L1047, PE-L122 y ME-L1299, entre otros proyectos similares. Asimismo, ICS mantiene intercambio permanente con la División de Política Regulatoria de la OCDE.

VI. Riesgos Importantes

- 6.1 Se han identificado dos riesgos moderados-bajos: (i) la posible dificultad de coordinación entre las agencias de gobierno involucradas que perjudicaría una implementación efectiva; (ii) la posible discontinuidad derivada de la revisión de prioridades a partir de las elecciones presidenciales de 2021 y del proceso constituyente. Se mitigarán esos riesgos a través del diálogo institucional coordinado por la Representación del BID en Chile, con base en su conocimiento de las instituciones chilenas y la economía política del país.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".